E Mercurio, 24 Enero de 2010

El gobierno entrante tiene atribuciones para revisarlas:

Bachelet transfirió 1.000 inmuebles a entidades sociales y comunitarias en cuatro años

PABLO OBREGÓN CASTRO

Hay incertidumbre entre las organizaciones sociales y comunitarias que durante la era concertacionista funcionaron de manera gratuita en oficinas, casas y edificios públicos.

Entre 2006 y 2009, el Estado realizó 217 transferencias y 718 concesiones de corto plazo a organizaciones de la sociedad civil. La mayoría de ellas pueden ser revisadas por la nueva administración.

Es el caso del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), que opera hace tres años en una sede prestada por el Ministerio de Bienes Nacionales; de la Unión Nacional de Trabajadores, que ocupa una amplia casona céntrica perteneciente al INP, y de varias sedes provinciales de la CUT que, según cercanos a la nueva administración, podrían tener un uso más rentable para los chilenos.

Esto, en el entendido que los recursos que el Ministerio de Bienes Nacionales obtiene por la gestión de los inmuebles estatales deben destinarse, por ley, al desarrollo de los respectivos gobiernos regionales.

Un estudio encargado por la Dipres estimó que el valor comercial del stock de bienes inmuebles públicos es de US$ 1.200 millones y, a pesar de eso, la administración de ese activo no ha formado parte de la agenda de modernización de la administración pública.

"Existen pocos incentivos para la utilización eficiente de estas edificaciones (...) ignorando que a estos activos se les debe exigir la rentabilidad del mejor proyecto de inversión desechado", dice el estudio.

Las cifras de ese catastro resultan elocuentes: sólo el 54% de la edificación pública es utilizada para oficinas y el 46% restante es utilizado para bodegas, estacionamientos, cocinas y casinos entre otros usos menores.

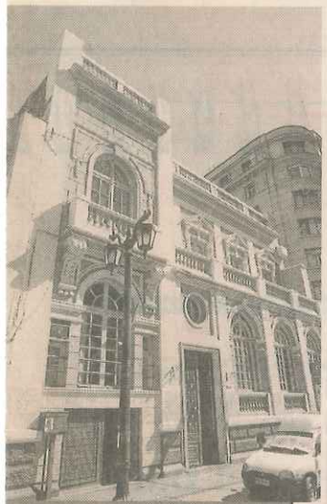
Paradójicamente, los ministerios y servicios públicos que más han crecido durante la última década lo han hecho, en gran medida, en oficinas arrendadas, las que tienen un costo anual superior a los US$ 25 millones.

Política de gobierno

Esta política de transferencias de inmuebles hizo que muchas organizaciones sociales perdieran independencia y postergaran su rol principal, que es operar como contrapeso de las instituciones del Estado, dice el investigador del Instituto Libertad, Tomás Duval, quien estima que el Estado aporta más del 46% del presupuesto corriente de las ONG.

Y hay un problema adicional: ignorando que el Estado tiene atribuciones para redestinar esos inmuebles cada cinco años, algunas organizaciones han invertido millonarios recursos en mejoras y ampliaciones, asumiendo que nunca tendrán que irse.

En tanto, los tiempos para el cambio de mando se acortan y la Presidenta ya pidió un registro completo de los bienes muebles e inmuebles y una nómina de contratos de arriendo.

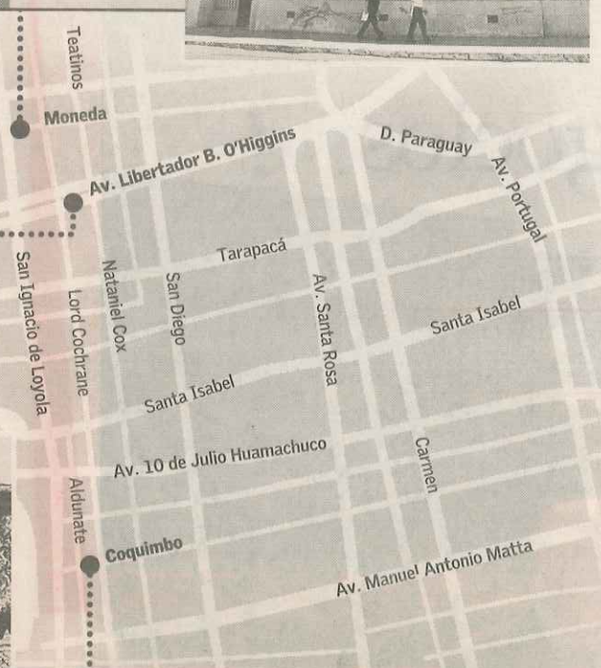


CUT

Bienes Nacionales transfirió esta sede de Alameda en 2005. Corresponde a un traspaso definitivo.

UNT

El gobierno de Lagos le transfirió esta casona a la UNT, donde antes funcionaba un jardín infantil del INP. Concesión vence en julio.

Movilh

El gobierno entregó por cinco años esta casa ubicada en Santiago. Además, financió su reparación. Contrato vence en dos años.